

Reconstrucción a paso de tortuga

A casi un año del megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, el Ejecutivo se ha visto obligado a reconocer que la reconstrucción de las viviendas siniestradas está al debe. De acuerdo con las cifras oficiales, a diciembre del año pasado el plan de reconstrucción, que contiene 166 medidas, anotaba un avance del 26%; el diseño del plan incluye el levantamiento de viviendas, subsidios y beneficios sociales, regularizaciones de propiedad, reposición de servicios y comunicaciones, nuevas urbanizaciones, mapas de riesgo y cambios legislativos.

Si bien en su momento se destacó la perspectiva global de la iniciativa, también se observó que carecía de objetivos más inmediatos a la luz de la urgencia principal: la crisis de vivienda. La realidad muestra, diez meses después, que ese nudo fundamental no se ha resuelto y que, más aún, existe un evidente retraso en la manera de enfrentarlo.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, ha reiterado que el plan contempla un desarrollo a cinco años y que, por tanto, su progreso ha sido en línea con ese plazo; el Minvu, agregó, ha trabajado en acortar los tiempos de respuesta, los que en gene-

“La falta de aptitud en administrar el aparato público es decepcionante en una coalición política que se propuso devolver al Estado un rol preponderante”.

ral demandan dos años para construir una vivienda.

Un balance de marzo de 2024 estableció que se quemaron casi 3.100 construcciones regulares y 1.500 ubicadas en campamentos; la ministra Toro informó que ya se han asignado 591 subsidios en sus varias modalidades. Un comunicado del Minvu precisó que se están edificando 273 viviendas con distintas tipologías de apoyo gubernamental, lo que equivale a poco más del 5% del total afectado por el fuego.

A juicio de Toro, en cambio, el plan es “realista” y puso como ejemplos comparativos que todavía hay medidas “pendientes” vinculadas con desastres como la erupción del volcán Chaitén en 2008, el terremoto de 2010 o las inundaciones de Atacama en 2015.

En una tragedia similar a la de 2024, el gran incendio de 2014 en Valparaíso, con más de 2 mil 400 viviendas dañadas, el 77%

de ellas estaba reconstruida 15 meses después del siniestro, pero la mitad por “autoconstrucción precaria” y en los mismos lugares de riesgo, conforme con un estudio del Observatorio Valparaíso de 2015.

Las dificultades en el proceso reflejan obstáculos propios de un Estado lento de reacciones y con manifiestos desajustes de coordinación entre sus partes, centralista y falta de agilidad; con todo, esas condiciones estructurales, que también han determinado a los gobiernos previos, no excusan la responsabilidad de la actual administración por haber profundizado las fallas de la gestión pública tras la catástrofe, en particular en el ámbito más sensible, la construcción de viviendas.

En esta materia, además, no es posible para el Gobierno invocar la adversa correlación de fuerzas en el Congreso, causas ideológicas o factores externos; la inhabilidad a la hora de encauzar la reconstrucción solo es atribuible a deficiencias propias.

La falta de aptitud en administrar el aparato público es decepcionante en una coalición política que en su programa se propuso devolver al Estado un rol preponderante en la provisión y garantía de derechos, y que ha defendido una ampliación de sus competencias en múltiples direcciones.